

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : FABIO LEÓN PUERTA ARDILA
DEMANDADO : COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-012-2021-00518-01
RADICADO INTERNO : 336-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 377

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de invalidez del 1º de octubre de 2019 al 28 de febrero de 2021, junto de las mesadas adicionales de diciembre; al pago de los intereses moratorios o en subsidio la indexación; y al pago de costas procesales.

Como fundamentos de los hechos plantea que el demandante nació el 9 de febrero de 1959; el 21 de julio de 1978 se afilió a Colpensiones; en el mes de junio de 2017, el actor presentó cuadro clínico de pérdida de memoria, por lo que permaneció incapacitado en forma permanente; la EPS SURA le canceló los primeros 180 días de incapacidad al demandante, por el comprendido entre el 30 de octubre de 2017 al 10 de noviembre de 2019; Colpensiones calificó al actor el 14 de enero de 2021 y base a ello, solicitó la pensión de invalidez,

aportando para ello la calificación y el certificado de pago de incapacidades emitido por internet por EPS SURA; promedio de la resolución SUB 55.228 del 1º de marzo de 2021, le fue reconocida al prestación económica, con una mesada pensional de \$1.613.946, por tener cotizadas 2.076 semanas, y contar con una pérdida de capacidad laboral del 54% estructurada el 27 de mayo de 2019; asegura el actor, que el reconocimiento de la pensión se dio a partir del 1º de marzo de 2021, incluido en nómina de marzo de 2021, expresando Colpensiones que, la certificación de incapacidades del 8 de enero de 2021 expedida por EPS SURA no contaba con las formalidades establecidas e invocando el concepto BZ_2016_5976661 del 10 de junio de 2016 en el que se indica que los certificados de incapacidades descargados de internet y que se aportan como medio probatorio, por sí solos no son válidos ni oponibles a Colpensiones, solo con válidos si se presentan en sobre sellado y suscrito por el funcionario competente.

El demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación el 5 de marzo de 2021, en contra de la resolución emitida por Colpensiones, solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez desde el 11 de octubre de 2019, que corresponde a la fecha a partir de la cual la EPS SURA canceló los primeros 180 días de incapacidad y el pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993; en resolución SUB 93.290 del 19 de abril de 2021 se confirmó el acto administrativo anterior por no cumplir con los requisitos establecidos, dado que el certificado de incapacidades emitido por la EPS SURA está sin firma del funcionario competente, sin cargo del funcionario competente y sin poder validar la autenticidad del mismo. Frente a la anterior decisión, considera el actor que viola el debido proceso al no dar validez a los certificados emitidos por la entidad prestadora de servicios de Salud, toda vez que este tipo de documentos no requieren firmas, ni sellos, ni requieren ningún tipo de autenticación, al presumirse auténtico pues en ningún momento dicho certificado de incapacidades emitido por la EPS SURA, fue tachado de falso.

RESPUESTA A LA DEMANDA

Colpensiones en su contestación a la demanda acepta la fecha de nacimiento del actor; la calificación de pérdida de la capacidad laboral; la reclamación de la pensión de invalidez; el reconocimiento de la pensión de invalidez desde el 1º de marzo de 2021, por las razones expuestas; la interposición de los recursos de ley; Colpensiones confirmó la decisión en

resolución SUB-93.290 de 2021. No es cierta la fecha de afiliación al ISS. No le consta el cuadro clínico padecido por el actor; el pago de las incapacidades por la EPS SURA; no le consta que con la reclamación haya aportado el certificado de incapacidad. Considera que las demás afirmaciones presentadas, no corresponden a hechos sino a una descripción de lo que considera la parte accionante.

Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas dentro del líbello petitorio, por carecer de fundamentación fáctica, legal y probatoria. propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar retroactivo de pensión de invalidez; inexistencia de la obligación a pagar intereses moratorios; prescripción; imposibilidad de condena en costas; buena fe de Colpensiones; innominada (expediente digital 07).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 10 de octubre de 2023, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que, al demandante, le asiste el derecho al disfrute de su pensión de invalidez, a partir del 11 de octubre de 2019. CONDENÓ a la Colpensiones, a reconocer y pagar a favor del actor, el retroactivo pensional causado desde el 11 de octubre de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 por valor de \$29.385.559; a reconocer y pagar, sobre la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional, los correspondientes intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el 15 de mayo de 2021, conforme a la causación y exigibilidad de cada una de las mesadas pensionales ordenadas y hasta el pago obligatorio de las mismas en la tasa de interés vigente al momento de pago efectivo. Condenó en costas a Colpensiones.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandada apeló la decisión de condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional, solicitando que los mismos sean revocados, o en caso que se confirme, se modifique la fecha a partir de la cual se deben reconocer, por considerar que en la sentencia T 588 de 2003, 1024 de 2004 y SU 065 de 2018, en los casos en que se pretende el reconocimiento del interés moratorio, como pretensión principal o subsidiaria o consecuencial al reconocimiento pensional, solo se causan tratándose en pensión de vejez e invalidez a partir

del sexto mes siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional; las sentencias referidas, hablan de los 6 meses que tiene en fondo de pensiones para realizar el estudio de la pensión y 2 meses adicionales para la inclusión en nómina de pensionados. Como en este evento la reclamación fue radicada el 14 de enero de 2021, los intereses deben ser reconocidos a partir del 15 de julio de 2021 y no desde el 15 de mayo de 2021; que la prestación fue reconocida a partir del 1º de marzo de 2021, ello es, es, mes y medio después de haberse presentado la reclamación.

En segundo lugar, frente al retroactivo pensional, sostiene que existe jurisprudencia que señala que no proceden cuando en sede administrativa no se logra acreditar los requisitos para su reconocimiento; que el motivo por el cual fue negada fue porque el certificado de incapacidad aportado con la reclamación no cumple con los requisitos, dado que no cuenta con la firma del funcionario competente ni el cargo del funcionario, y resalta que lo anterior no impidió el reconocimiento de la prestación, solo que quedó en suspenso el reconocimiento del retroactivo al no cumplir el documento aportado con los requisitos de forma para hacer el estudio formal del retroactivo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones insiste en sus argumentos de defensa y por tanto solicita modificar el fallo de primera instancia en cuanto a la fecha a partir de la cual deberá reconocer los intereses de mora a favor del demandante, ello, teniendo en cuenta que quedó acreditado que la reclamación administrativa se elevó ante Colpensiones el día 14 de enero de 2021 y según los criterios normativos y jurisprudenciales que paso a desarrollar, la entidad que represento tenía hasta seis (06) meses para resolver la solicitud prestacional.

Respecto a la solicitud de reconocimiento y pago de intereses moratorios, es importante reiterar la solicitud de no condenar a Colpensiones al reconocimiento de intereses conforme lo indica la juez de primera instancia, pues la sentencia SU 065 de 2018 indicó: “esta Corporación declaró exequibles los apartados demandados tras considerar que el artículo 141 parcialmente cuestionado no desconocía el artículo 13 Superior, en tanto que la comprensión correcta de esa prescripción indica que se aplica a todo tipo de pensiones, sin distinción alguna. Tal conclusión se derivó de la

interpretación de la mencionada disposición, la cual se sustentó en las siguientes premisas argumentativas:

- (i) El reconocimiento de los intereses moratorios tiene por finalidad proteger a las personas de la tercera edad, quienes debido a su estado de salud o físico “se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia”, por lo que el pago tardío de sus mesadas pensionales puede comprometer su mínimo vital;
- (ii) El artículo 141 de la ley 100 de 1993 incorporó en el ordenamiento jurídico colombiano “un mecanismo de liquidación para cancelar las pensiones atrasadas o en mora, sin que el legislador distinguiera en el tiempo o en el espacio a determinados grupos de pensionados”;
- (iii) La disposición acusada no crea ningún tipo de distinciones entre pensionados o clases de pensiones. En realidad, el legislador estableció una distinción el tiempo, es decir, en el momento en el cual se produce la mora para efectos de saber cuál es la normatividad vigente con base en la que deberá hacerse su cálculo.
- (iv) La correcta interpretación del enunciado legal censurado “advierde que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo”.

De igual forma cita como sustento a su favor apartes de las sentencias T 586 de 2012, C-601 de 2000, y la SL 11897 de 2016, para indicar que los intereses se causan a partir del sexto mes.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación:

i) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral; ii) Si tiene derecho a los intereses moratorios o si hay lugar a modificar la fecha de su reconocimiento.

Y en el grado jurisdiccional de consulta se analizará, el valor del retroactivo pensional, en caso de que haya lugar al mismo, y si hay lugar a la condena en costas impuesta a Colpensiones.

1. Del retroactivo de la pensión de invalidez

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que el demandante fue calificado por Colpensiones el 31 de enero de 2021, oportunidad en donde se determinó que el Sr. Fabio León Puerta Ardila cuenta con una pérdida de la capacidad del 54%, estructurada el 27 de mayo de 2019 (fls. 17 a 23 del expediente digital 03); certificado de la EPS SURA, denominado historial de incapacidades, donde se plasma que el inicio de las incapacidades (13 a 14); el demandante solicitó la pensión de invalidez el 14 de enero de 2021 y en resolución SUB-55.228 de 2021 se reconoció la prestación económica desde el 1º de marzo de 2021, porque, aunque en el expediente reposaba certificado de incapacidades, no contaba con la firma por el funcionario competente (fls. 24 a 34); contra esa decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación (fls. 35 a 40); y en resolución SUB-93.290 de 2021 se confirmó la decisión de la resolución SUB-55.228 de 2021 (fls. 43 a 56); en resolución DPE 4024 del 2 de junio de 2021, Colpensiones confirmó la resolución SUB-55.228 de 2021 y concedió la pensión de invalidez y ordenó el pago de la pensión de vejez desde el 1º de abril de 2021, es decir, a partir del día siguiente a la última cotización (fls. 294 a 314 del expediente digital 07); en resolución AASUB 159 del 23 de julio de 2021, se rechazaron los recursos interpuestos en contra de la resolución SUB-55.228 de 2021 (fls. 41 a 45).

En primera instancia, se condenó a Colpensiones a reconocer el retroactivo pensional desde el 11 de octubre de 2019, argumentando que en el expediente se allegó por ambas partes los certificado de incapacidades pagadas al actor, las cuales no fueron tachadas por las partes, y frente a lo manifestado por la accionada, que no cumplían con las condiciones para ser tenido en cuenta y faltar el cargo del funcionario, dicho argumento no fue acogido por la A Quo porque la carga de cancelar las mesadas pensionales desde la fecha de estructuración o desde la última incapacidad estaba por su cuenta y no existe prueba que el demandante haya tenido incapacidades hasta la fecha en que se reconoció la pensión de invalidez, y al no cumplir con la carga probatoria, de lo que existe prueba es que al demandante se le otorgaron incapacidades hasta el 10 de octubre de 2019. Como el demandante disfrutó de esos subsidios de incapacidad, determinó que solo puede disfrutar la prestación económica desde el día siguiente a la última de ellas, es decir, a partir del 11 de octubre de 2019 al existir incompatibilidad entre el subsidio de incapacidad y las mesadas pensionales.

Pues bien, se tiene que el art. 40 de la Ley 100 de 1993 relativo al monto de la pensión, reza en su último párrafo: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*.

Por su parte, el art. 10 del Decreto 758 de 1990 en concordancia con el art. 31 de la Ley 100 de 1993 aclara aún más el tema al señalar frente al disfrute de esta prestación económica al señalar *“la pensión de invalidez por riesgo común se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando del beneficiario estuvieron en goce del subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”* y el art. 3º del Decreto 917 de 1999 por medio del cual se define la fecha de estructuración o declaración de la pérdida de capacidad laboral establece que *“... En todo caso mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal no habrá lugar a recibir las prestaciones derivadas de la invalidez”*.

En primera instancia se reconoció la prestación económica en forma retroactiva a partir **del 11 de octubre de 2019**, día siguiente a percibir el último subsidio por incapacidad.

Visto lo anterior, al analizar la prueba aportada en su conjunto, para la Sala es claro que el demandante fue calificado por Colpensiones con una pérdida de la capacidad laboral del 54% estructurada el 27 de mayo de 2019 (fls. 17 a 23 del expediente digital 03); a fls 13 y 14 del expediente digital 03 y fls. 132 y 133 del expediente digital 07, reposa certificado de incapacidades emitido por la EPS SURA el 8 de enero de 2021, en los que se refleja cómo **últimos subsidios de incapacidades pagadas** los siguientes periodos:

- Del 26 de marzo al 30 de marzo de 2019
- Del 12 de julio al 10 de agosto de 2019
- Del 12 de agosto al 10 de septiembre de 2019
- Y del 11 de septiembre al **10 de octubre de 2019**

Por su parte, de los mismos certificados se extrae, que por los periodos del 22 al 23 de marzo de 2019 y el 21 de junio de 2019, no aparece reportado el pago de estas y en la casilla de “valor pagado” aparece reportado “\$0”. Prueba que

da lugar a concluir, que el último subsidio de incapacidad percibido por el actor tuvo lugar hasta el **10 de octubre de 2019**.

Ahora bien, en principio, la Corte Suprema de Justicia adoptaba la posición donde disfrute de la prestación económica de invalidez se generaba desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, y en los eventos donde existía pagos de incapacidades posteriores a la fecha de estructuración, había lugar a ser descontados, pues así se indicó en la sentencia SL 1562 de 2019 cuando señaló:

“Así que, pese a la condición de trabajador dependiente del actor y la existencia de aportes al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, esta Sala ha indicado con anterioridad (ver sentencia SL619-2013), que ello no desvirtúa el reconocimiento retroactivo del derecho pensional desde que se estructuró el estado de invalidez. En esos términos, no se equivocó el ad quem al señalar que la concurrencia de estas específicas circunstancias (continuidad en la prestación del servicio y cotización al Sistema General de Pensiones), no desvirtúan lo establecido en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, es decir, que el reconocimiento de la pensión de invalidez se haga desde la estructuración.

Ahora bien, en lo que atañe a la incompatibilidad entre el pago de mesadas pensionales y subsidios por incapacidad temporal, el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, establece que: (...)

De cara a lo establecido en el citado precepto, estima la Sala que el juez de apelaciones tampoco lo desconoció ni le dio un entendimiento erróneo, pues, por el contrario, al descontar del pago del retroactivo pensional los periodos de subsidios por incapacidad temporal, procuró armonizar lo establecido en el decreto enunciado con las restantes disposiciones de la Ley 100 de la 1993, que ordenan el reconocimiento de la prestación desde el momento de estructuración de la invalidez y salvaguardar el propósito indiscutible de auxilio.

*Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 **es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez**, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración. (...)*

*De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, **cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio***

por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.” (Resalto de la Sala)

Esa posición fue rectificada en sentencia reciente SL 5170 de 2021, por medio de la cual el Alto Tribunal determinó la posibilidad de pagar las mesadas pensionales desde la fecha de estructuración de la invalidez, en los eventos en que no se hayan reconocido subsidios por incapacidad, pues de ser así, el pago de la prestación se realiza a partir de la última incapacidad. Al respecto dijo:

*“Así las cosas, frente al tema del reconocimiento de la pensión de invalidez estima la Sala que el Tribunal no incurrió en ningún yerro en la intelección que asignó a los preceptos normativos enunciados cuando existen subsidios por incapacidad temporal con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, al entender que las mesadas se comienzan a pagar, de forma retroactiva, desde la data de la estructuración, **pero siempre que con posterioridad a ella no se hubieren reconocido subsidios por incapacidad**, continuos o discontinuos, evento en el cual se pagará, pero a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad.*

(...)

*Es claro entonces que, mientras el afiliado se encuentre recibiendo el subsidio por incapacidad temporal no puede percibir prestaciones derivadas de la invalidez, como son las mesadas pensionales, **cuyo pago procede una vez la entidad previsional reconozca la pensión, momento a partir del cual ya no procede el pago de las incapacidades**, porque la acción protectora es asumida por otra prestación, dado el nuevo hecho que la causa – la invalidez-, siendo la razón por la cual el sistema de salud no contempla prestaciones económicas para los pensionados --Artículos 28 del Decreto 806 de 1998 y 2.1.3.6 del Decreto 780 de 2016--.*

(...)

*Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar que **cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad**, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019).* ”

Con miramiento a lo anterior, considera la Sala que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el **11 de octubre de 2019** como se indicó en la sentencia de primera instancia, **pues se repite el último pago de la incapacidad tuvo lugar el 10 de octubre de 2019**, ello es, con anterioridad a la fecha de estructuración.

En lo que respecta a la negativa del retroactivo pensional bajo el sustento que los certificados de incapacidades descargados de portales de internet por si solos no son válidos por hacerle falta la firma del funcionario competente y el cargo del funcionario que lo emitió. No se acoge dicho sustento para negar el retroactivo pensional, teniendo en cuenta que el demandante cumplió con la carga de aportar el certificado de incapacidades, al haber cumplido con la obligación probatoria de adjuntar a Colpensiones, el certificado de incapacidades, con fecha de expedición del 8 de enero de 202 el cual reposa a fls 132 y 133 del expediente digital 07, del que se desprende, que la última incapacidad cancelada tuvo lugar el 10 de octubre de 2019.

En ese orden de ideas, si nos remitimos a la norma del CGP que hace referencia a los documentos auténticos, encontramos lo siguiente:

“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, **se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos**, según el caso. (...)” (Resalto de la Sala)

En ese sentido, el certificado de incapacidades no fue tachado de falso ni fue desconocido por la EPS SURA, en calidad de autora del mismo, en los términos del art 272 del CGP. Por el contrario, se debe adoptar como auténtico al existir certeza que el funcionario que lo elaboró fue la Sra. Laura Duque Guzmán Guzmán Duque, quien aparece con la calidad de Transcriptor (fl. 133 del expediente digital 07).

Aunado a lo anterior, considera la Sala, que al haber cumplido la parte accionante la carga de acreditar que el último pago del subsidio de incapacidad tuvo lugar hasta el mes de octubre de 2019, en caso de existir duda por parte de Colpensiones frente a dichos pagos, era su responsabilidad investigar y demostrar la existencia de subsidios de incapacidad con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral sin que lo haya hecho. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia de primera instancia en este punto.

Ahora, al revisar el retroactivo pensional reconocido en primera instancia del 11 de octubre de 2019 al 28 de febrero de 2021 (día anterior al reconocimiento

de la pensión en resolución SUB-55.228 de 2021, que tuvo lugar a partir del 1º de marzo de 2021) a la Sala le da el mismo valor reconocido en primera instancia.

Y en este evento no operó el fenómeno de la prescripción, dado que la pensión de invalidez se reconoció en la resolución SUB-55.228 de 2021, contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación el 5 de marzo de 2021, oportunidad en que se solicitó reconocer la pensión desde el 11 de octubre de 2019 (fls. 35 a 40 del expediente digital 03), y se resolvió el primero de los recursos en forma desfavorable, en la resolución 93.290 de 2021 (fl. 43 del expediente digital 03); y la demanda fue presentada el 23 de noviembre de 2021, sin que haya superado los 3 años a los que hacen referencia los arts 488 del CST y 151 del CPT y SS.

Con fundamento en lo anterior, se CONFIRMARÁ el reconocimiento del retroactivo pensional desde el día siguiente del último subsidio de incapacidad, determinado en la sentencia de primera instancia.

2. De los intereses moratorios

En primera instancia se reconocieron los intereses moratorios argumentando que la reclamación de la pensión de invalidez fue elevada el 14 de enero de 2021 y el reconocimiento de la pensión se dio en la resolución SUB-55.228 de 2021, fecha en que se habían consolidado los requisitos para acceder a la prestación económica sin que se haya radicado el pago del retroactivo pensional, superó el término de los 4 meses consagrados en el art. 9º de la Ley 797 de 2003 sin que existiera justificación. Reconoció el pago de los intereses moratorios desde el 15 de mayo de 2021.

Decisión que se CONFIRMARÁ, en aplicación del parágrafo 1º del art. 9 de la Ley 797 de 2003 que establece *“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el petionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.”*, y no como lo indica la apoderada de Colpensiones en su recurso de apelación, en vista que la Ley 797 de 2003 es la normatividad aplicable en este caso, y no la Ley 700 de 2001, en tanto que fue la primera de ellas, en calidad de norma especial, fue

la que entró a establecer un término de 4 meses para el reconocimiento de la pensión, y adicionalmente es norma posterior a la Ley 700 de 2001.

Así mismo, porque la posición de la Corte Suprema de Justicia es que el fondo de pensiones tiene 4 meses para reconocer la pensión, y así se ha plasmado en las sentencias SL 1562 de 2019 y SL 4335 de 2022, entre otras; resaltándose de la primera de ellas lo siguiente:

“En sede de instancia, basta con reiterar que el Decreto 656 de 1994, conceden a las administradoras de pensiones un plazo gracia de 4 meses para decidir acerca de las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de las pensiones de invalidez, contados a partir de la radicación, por parte del interesado, de la petición y los documentos necesarios para ello. En el caso concreto no se discute que la petición fue elevada por el actor el 8 de junio de 2011, de suerte que los cuatro meses de gracia vencían el 8 de octubre de 2011 (inclusive).

Por lo indicado, se condenará a Colpensiones a pagar en favor del señor Luis Alfonso Monroy Garzón los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 9 de octubre de 2011, esto es, 4 meses con posterioridad a la data en que realizó la solicitud de reconocimiento del derecho pensional hasta el momento en que se produzca el correspondiente reconocimiento del retroactivo pensional.”

En ese sentido, como la pensión de invalidez fue solicitada el **14 de enero de 2021** según reposa en la resolución SUB 55.228 de 2021, y si bien, Colpensiones dentro de los 4 meses posteriores a la reclamación en acatamiento del parágrafo 1º del art. 9 de la Ley 797 de 2003, reconoció la pensión de invalidez en la resolución SUB 55.228 del 1º de marzo de 2021, lo hizo a partir de corte de nómina (1º de marzo de 2021) aduciendo que se había aportado certificado que no cumplía con los requisitos de validez.

No obstante, con el certificado de incapacidades aportado por el demandante a Colpensiones y que reposa en el fls. 132 y 133 como anexo a la contestación a la demanda, cuenta con fecha de expedición del 8 de enero de 2021, y allí se desprende el derecho al reconocimiento de la pensión desde el día siguiente al último pago del subsidio de incapacidad, lo que hace que el retroactivo pensional debiera ser reconocido y se encuentra en mora desde el **11 de octubre de 2019** como se indicó en la sentencia de primera instancia.

3. De las costas procesales en primera instancia

Se CONFIRMARÁN, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, y en este evento, las

pretensiones del reconocimiento del retroactivo pensional e intereses moratorios fueron reconocidas a la parte accionante.

Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : FABIO LEÓN PUERTA ARDILA
DEMANDADO : COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-012-2021-00518-01
RADICADO INTERNO : 336-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de diciembre de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO